



El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora hizo el llamado a unirse a la movilización del 1 de mayo. | FOTO: CORTESÍA

Organizaciones marcharán en rechazo a acciones del gobierno

● “En los últimos meses la clase trabajadora ha sido golpeada grandemente en distintos sectores”, señala el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, que organiza una marcha unificada.

Xiomara Alfaro
noticias@eldiariodehoy.com

Organizaciones sociales marcharán el 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, en rechazo a las políticas y acciones del gobierno central, que consideran perjudican a la clase trabajadora.

Entre estas acciones señalan una grave violación a los derechos de este sector, la cual se ha agudizado con el despido de miles de trabajadores del sector público, así como una transgresión al derecho de la libre sindicalización.

Durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele, señalan que hubo 20,650 despidos, entre entidades de gobierno, alcaldías y Asamblea Legislativa. Para el segundo periodo, hasta octubre del año pasado ya se tenía 2,250, y más de 100 sindicalistas han sido separados de sus puestos de trabajo.

Asimismo señalan que el Estado no ha abordado el problema de los

bajos salarios.

“En los últimos meses la clase trabajadora ha sido golpeada grandemente en distintos sectores (...) Miles de personas trabajadoras por cuenta propia han sido desalojadas del centro histórico de San Salvador y de las principales ciudades, playas y lugares turísticos del país; miles de personas trabajadoras del sector rural están sufriendo desalojos por megaproyectos como Sur City 1 y 2, el aeropuerto del Pacífico, el viaducto de los de los Chorros, entre otros”, expuso Erick Zelaya, secretario general de la Unidad Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) durante una conferencia de prensa reciente.

Los representantes de organizaciones se refirieron además a la amenaza bajo la cual están miles de comunidades rurales, habitadas en su mayoría por trabajadores rurales, por la reactivación de la minería metálica, considerada una actividad altamente destructiva y contaminante.

Educación y salud

También critican la gestión del gobierno que en materia de Educación y Salud ha recortado los presupuestos y conducido al cierre de escuelas, centros de salud y la pérdida de puestos de trabajo en estos sectores.

Ante este escenario, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora hizo el llamado a sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones de la comunidad LGTQ+, jóvenes organizados, ambientalistas, indígenas, a víctimas del régimen de excepción, trabajadores por cuenta propia y al pueblo en general para que se unan a esta marcha unificada el 1 de mayo a fin de exigir a las autoridades de gobierno mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y el fin de la represión gubernamental.

Las organizaciones que forman parte de este movimiento buscan desarrollar una marcha unificada en la que participen todos los sectores, para lo que han iniciado con una campaña denominada “Todas las luchas, una misma ruta”.

Denuncian cierre de 67 centros educativos y 4,212 docentes despedidos

El FMS califica estas acciones como “una política deliberada” que busca debilitar el sistema educativo público.

Xiomara Alfaro
noticias@eldiariodehoy.com

El Frente Magisterial Salvadoreño denuncia el cierre de al menos 67 centros educativos a nivel nacional y el despido de 4,212 docentes como parte, de lo que consideran, “una política deliberada” para debilitar el sistema educativo público.

A través de un comunicado, expresan que varias escuelas han sido clausuradas y otras se encuentran bajo amenaza de cierre, todo esto bajo argumentos como “supuestos riesgos estructurales, remodelaciones o baja matrícula”.

El FMS resalta que dentro de las instituciones que, a través de denuncias de padres de familia, personal docente y administrativo, tienen registro hay Escuelas de Educación Parvularia (EEP), Centros Escolares (C.E.) y Complejos Educativos (COED) que abarca desde parvularia hasta bachillerato.

En Ahuachapán ha sido cerrado el C.E. Caserío Regalo de Dios “Rodríguez Porth”, Cantón Ashapuco.

En Santa Ana: C.E. Cantón “San Sebastián”, El Espino y C.E. Canton “Los Apoyos” (3 de 5 CE. Cerrados). C.E. “Magdaleno Bárcenas Flores”, Cantón San Miguel, Texistepeque; y C.E. “Caserío Taxis Junction, Cantón Chilcuyo”, Texistepeque.

En Sonsonate hay 23 instituciones entre las cuales están E.E.P. María Reina de la Paz, la cual está en proceso de cierre; C.O.E.D. “Jorge Lardé”, Comunidad El Higueral; C.E. Cantón “Tapalshucut”, Izalco; C.E. Cantón “Paso de Canoa”, Santa Isa-

bel Ishuatán; además del C.E. “Miramar”, Santa Isabel Ishuatán.

En la zona central, en La Libertad hay cuatro instituciones afectadas, entre centros escolares y complejos educativos.

Asimismo se tiene registro de ocho en San Salvador, uno en Chalatenango, uno en Cabañas, 16 en Usulután; cuatro en Morazán; tres en San Miguel y dos en La Unión.

FMS: El derecho a la educación debe prevalecer

El FMS señala que la cifra real de escuelas afectadas podría ser mayor dado que muchas familias y personal docente se abstiene de denunciar por temor a represalias.

En tanto pone como ejemplo el caso del Centro Escolar Ojuste Limpio, en Concepción Batres, San Miguel, cuyo cierre fue detenido temporalmente gracias a la presión de los padres de familia.

Asimismo cuestiona que se quiera justificar estos cierres argumentando baja natalidad, unificación de escuelas con baja inscripción de estudiantes y la emigración.

“Si bien ha bajado la natalidad por la crisis económica, esa no es excusa para suprimir la educación; pues, aunque solo hubiera un niño, ese niño tiene derecho a la educación. Y si un docente pasa de tener 40 estudiantes a tener 25, puede dar una educación más personalizada a cada estudiante”, expone.

Señalan que el cierre de escuelas y el despido de más de 4,200 docentes forman parte de una estrategia de control social implementada por el Estado, por tanto, los maestros exigen un alto a estas medidas y establecer acciones que permitan que prevalezca el derecho a la educación de los niños y las niñas en el país.



Sonsonate es el departamento más afectado con el cierre de centros educativos; el FMS registra 23 cierres, seguido de Usulután, con 16 instituciones clausuradas, y San Salvador con 8. | FOTO: EDH/ARCHIVO